



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

COMISIONES UNIDAS DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA Y DE ADMINISTRACIÓN.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Segunda y de Administración, se turnó para estudio y dictamen la **Iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas para incluir la sanción resarcitoria por falta no grave**, promovida por la Diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la Legislatura 66 Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

Al efecto quienes integramos las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Segunda y de Administración, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, numerales 1 y 2, inciso d); 36, inciso d); 43, incisos e) y g); 44, 45, numerales 1 y 2; 46, numeral 1; y 95 numerales 1, 2 y 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el dictamen conforme al siguiente procedimiento:

Metodología

I. En el apartado denominado “**Antecedentes**”, se señala el trámite del proceso legislativo, desde la fecha de recepción de la iniciativa y turno a las comisiones competentes para la formulación del dictamen correspondiente.

II. En el apartado “**Competencia**”, se da cuenta de la atribución que tiene este Poder Legislativo local para conocer y resolver en definitiva el presente asunto.



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

III. En el apartado “**Objeto de la acción legislativa**”, se expone el objeto y alcance de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis del tema que la compone.

IV. En el apartado “**Contenido de la Iniciativa**”, y con la finalidad de establecer el análisis de la misma, se realiza una transcripción íntegra de la exposición de motivos de la iniciativa en el presente instrumento parlamentario.

V. En el apartado “**Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras**”, las y los integrantes de éstas expresan los razonamientos, argumentos y juicios de valoración de la iniciativa en análisis, en los cuales se basa y sustenta el sentido del dictamen.

VI. En el apartado denominado “**Conclusión**”, se propone el resolutivo que las comisiones someten a la consideración del Honorable Pleno Legislativo.

D I C T A M E N

I. Antecedentes

1. El día veinte de noviembre de dos mil veinticinco, la Diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la Legislatura 66, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas para incluir la sanción resarcitoria por falta no grave.



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

2. En esa propia fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, incisos f) e i) de la ley que rige a este Congreso del Estado, acordó turnar dicha iniciativa a las comisiones unidas de Estudios Legislativos Segunda y de Administración, mediante oficios números: SG/2A/AT-608 y SG/2A/AT-609, recayéndole a la misma el número de expediente 66-997, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Competencia

Este Poder Legislativo local es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, con base en lo dispuesto por el artículo 58, fracción I de la Constitución Política local, que le otorga facultades al Congreso del Estado, para expedir, reformar y derogar las leyes y decretos que regulan el ejercicio del poder público, como es el caso que nos ocupa.

III. Objeto de la acción legislativa

La presente iniciativa tiene como objeto precisar y fortalecer el marco normativo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, a fin de establecer de manera expresa que, en los casos de faltas administrativas no graves que ocasionen daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, la autoridad resolutora cuente con facultades claras para imponer la sanción resarcitoria correspondiente, armonizando así la pretensión punitiva y la pretensión reipersecutoria dentro de un mismo procedimiento, eliminando posibles antinomias entre disposiciones legales y garantizando la reparación integral del daño al erario, en observancia de los principios constitucionales de legalidad, responsabilidad y protección del patrimonio público.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

IV. Contenido de la iniciativa

A continuación nos permitimos transcribir de forma íntegra la exposición de motivos de la iniciativa en análisis, en aras de no omitir las razones ni la intención inicial de los accionantes:

“El artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, establece las responsabilidades de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del estado, en ese sentido a través del Tribunal de Justicia Administrativa se puede imponer sanciones por faltas graves y a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o de los Órganos Internos de Control se pueden imponer diversas sanciones por faltas no graves a servidores públicos, por las conductas contrarias de los principios de objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas.

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas tiene por objeto establecer las competencias del Estado y sus municipios para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

A nivel constitucional e internacional, el resarcimiento del daño a la



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

Hacienda Pública tiene una raíz constitucional en los artículos 109 y 113 de la CPEUM, que establecen el sistema de responsabilidades administrativas y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

*Además, la política pública anticorrupción en México coloca la recuperación del patrimonio público como un objetivo prioritario, alineándose con estándares internacionales como la **Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 35 y 53)**, que obliga a los Estados a garantizar mecanismos eficaces de indemnización.*

Artículo 35. *Indemnización por daños y perjuicios Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que /as entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización.*

Artículo 53. *Medidas para la recuperación directa de bienes Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno: a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención; b) Adoptará las medidas que sean necesarias*



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

a fin de facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente Convención que indemnicen o resarzan por daños y perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre /os bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

La protección de la Hacienda Pública constituye un eje central del sistema jurídico mexicano, en tanto garantiza el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos del Estado. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas establece mecanismos claros para prevenir, sancionar y reparar las conductas de las personas servidoras públicas y de los particulares vinculados con actos que menoscaben el patrimonio público. Dentro de este marco, los daños y perjuicios a la Hacienda Pública son una categoría de especial relevancia, pues afectan no solo la disponibilidad de los recursos, sino la confianza ciudadana en las instituciones.

*La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas no se limita a sancionar conductas irregulares, sino que incorpora la obligación de **resarcir los daños y perjuicios** que resulten de actos u omisiones indebidas. Por tanto, las sanciones*



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

de naturaleza indemnizatoria son aplicables tanto en faltas graves como en las calificadas como no graves.

El artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas dispone que también se considerará falta administrativa no grave los daños y perjuicios causados a la hacienda pública o al patrimonio, misma que dará lugar a la imposición de sanciones y a la reparación del daño causado a la hacienda pública o patrimonio. En ese sentido, el daño no solo se entiende como la pérdida inmediata de recursos, sino como todo menoscabo patrimonial derivado de una conducta irregular.

*Doctrinalmente, el **daño** refiere a la afectación directa al patrimonio público, mientras que el **perjuicio** corresponde a las ganancias lícitas que el Estado dejó de percibir por la conducta irregular.*

Tómese como referencia la siguiente tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Registro digital: 258965 DAÑO Y PERJUICIO, DIFERENCIA ENTRE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES). Conforme a la legislación civil, artículos 2108 y 2109, el daño implica pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio, por falta de cumplimiento de una obligación, y el perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Lo cierto es que jurídicamente, tanto el daño como el perjuicio, implican lesión al patrimonio, pues según la connotación que al



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

término daño asigna Escriche en su Diccionario de Legislación y Jurisprudencia: es el detrimento, perjuicio o menoscabo que se recibe por culpa de otro en la hacienda o la persona. En general, todo daño puede causarse por dolo o malicia, por culpa o por caso fortuito; importando mucho en cualquier evento, saber el modo para arreglar la responsabilidad que debe exigirse. Como es de verse, aun cuando la legislación civil define en dos preceptos al daño y el perjuicio, en realidad no existe entre los términos daño y perjuicio, sino una diferencia de matiz, pero de todas formas, la parte de la pérdida o menoscabo tratándose del daño, o la privación de cualquier ganancia lícita, tratándose del perjuicio, de todas formas, éste y el daño repercuten en el patrimonio. Amparo directo 4809/66. Carlos Morales Saldívar y coagraviados. 20 de enero de 1967. Cinco votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Instancia: Primera Sala Sexta Época Materia(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXV, Segunda Parte, página 19

Ahora hablemos acerca de la pretensión punitiva y reipersecutoria, en el marco del derecho disciplinario mexicano, la potestad sancionadora del Estado se manifiesta en dos dimensiones diferenciadas: la pretensión punitiva, orientada a castigar conductas contrarias a los deberes funcionales en la administración pública, y la pretensión reipersecutoria o resarcitoria, cuyo objeto es reparar el daño causado al patrimonio público. Ambas responden a finalidades distintas, aunque complementarias, dentro



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

del régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas.

*Por cuanto hace a la **pretensión punitiva** es aquella que ejerce la autoridad disciplinaria para imponer sanciones a quienes vulneran los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos, los cuales rigen el servicio público.. Su fundamento se encuentra en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.*

De acuerdo con Fix-Zamudio y Valencia Carmona (2018), esta dimensión "responde a la necesidad de reafirmar la autoridad del Estado mediante el castigo ejemplar, procurando a la vez la prevención general y especial". Las sanciones disciplinarias previstas en la Ley de Responsabilidades del Estado de Tamaulipas comprenden la amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas.

*La **pretensión reipersecutoria** o resarcitoria tiene naturaleza distinta, pues su objetivo no es castigar al infractor, sino **reparar el daño patrimonial ocasionado al Estado**. El artículo 79 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas establece que los responsables de faltas administrativas graves*



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

deberán resarcir los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos.

Carbonell (2016) señala que "la acción resarcitoria constituye una obligación patrimonial autónoma que subsiste incluso cuando la sanción disciplinaria ha prescrito, dado que el interés superior del Estado es recuperar lo indebidamente erogado".

En ese orden de ideas, la pretensión punitiva se dirige al sujeto, mientras que la reipersecutoria se orienta hacia su patrimonio.

Cuando la pretensión estatal es punitiva, su intención es castigar al servidor público por la comisión de una infracción a las normas que deben regir su actuación. En función de la materia, esta pretensión puede agotarse imponiendo una sanción directamente (como una multa), o bien, acudiendo al órgano jurisdiccional para ejercitar una acción, como por ejemplo, la acción penal. La característica más relevante de esta pretensión punitiva, para efecto de nuestro estudio, es que al ostentarla, el Estado no tiene un interés patrimonial, sino que su interés consiste en cumplir con finalidades propias de una sanción: que el infractor no vuelva a cometer esa conducta, que expíe su culpabilidad, etcétera. Las sanciones que pueden imponerse por la responsabilidad política o la responsabilidad penal del servidor público, son consecuencia de una pretensión enteramente punitiva del Estado.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

En cambio, cuando la pretensión es reipersecutoria, el interés del Estado no es castigar al servidor público, sino que persigue la integridad del patrimonio del Estado. El hecho de que el servidor público haya o no actuado conforme a los principios que deben regir el desempeño de sus funciones, no es lo relevante en esta pretensión, y únicamente se toma en consideración para determinar la reprochabilidad de esa conducta. Lo realmente relevante es el hecho de que esa conducta haya causado un daño patrimonial al Estado. La pretensión reipersecutoria del Estado, sirve únicamente a la finalidad de dejar indemne al patrimonio del Estado. (Segunda Sala. Amparo Directo en Revisión 507/2015.)

*Desde la óptica de una Autoridad Investigadora, las sanciones de carácter indemnizatorio son aplicables tanto en faltas administrativas graves, como las faltas no graves. Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 50 de la **Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas**.*

*Artículo 50. También se considerará **falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público.***



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al patrimonio del ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente de la Auditoría Superior del Estado o de la autoridad resolutora.

En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaría de Finanzas, las tesorerías municipales, o la autoridad competente de los órganos autónomos, en el ámbito de su competencia, deberán ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado.

Por ende, es procedente reconocer que toda afectación generada a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, derivada de la comisión de faltas administrativas no graves previstas en el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, ya sea originada por dolo o por culpa, puede legítimamente reclamarse e incorporarse al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

*Ello resulta válido aun cuando no exista una disposición normativa expresa que así lo prevea, atendiendo al principio de **continencia de la causa**, entendido como el deber de mantener la unidad y coherencia procesal, a efecto de que todas las cuestiones sustancialmente vinculadas con una misma relación jurídica o hecho generador sean resueltas en un solo procedimiento.*

*De esta manera, se materializa el principio esencial de la responsabilidad conforme al cual **quien causa un daño, está obligado a repararlo**. Así, cuando una conducta provoque un detrimento o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio estatal, dicha afectación conlleva un menoscabo para el Estado, justificando que se requiera al servidor público responsable el resarcimiento correspondiente por el daño ocasionado.*

Tómese como referencia las siguientes tesis:

Registro digital: 2001929

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materia(s): Civil

Tesis: 1.3o.C.44 C (10a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, página 2580

Tipo: Aislada

**IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. NO ES FACTIBLE
DECRETARLA CUANDO EL LITIGIO INVOLUCRA EL
EJERCICIO DE ACCIONES DE DISTINTA NATURALEZA,**



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

NO PUEDE DIVIDIRSE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA.

La competencia constituye la asignación de determinadas facultades a un Juez para conocer de un litigio, mientras que la procedencia de la vía se traduce en la forma correcta en que debe tramitarse. Por consiguiente, un tribunal no puede decretar la improcedencia de la vía si, en principio, no contaba con facultades para conocer de la controversia. Lo anterior resulta relevante cuando el juzgador está en presencia de un conflicto que involucra el ejercicio de acciones de diversa naturaleza. En ese caso, el Juez debe identificar si la continencia de la causa puede o no ser dividida. Esto, para establecer sí debe analizar el conflicto en forma aislada o conjunta. Sí la continencia de la causa no puede ser dividida, entonces, debe estudiar la controversia en forma integral. Es decir, el tribunal debe determinar sí es competente para conocer de la totalidad del conflicto o sí otro órgano jurisdiccional cuenta con facultades para ello. En este último evento, esto es, sí un órgano judicial diverso es competente para tramitar y resolver el litigio, así debe decretar/o, sin referirse en absoluto a la vía. Esto, porque resulta irrelevante sí alguna de las acciones debió tramitarse en una vía distinta a la intentada por el justiciable, cuando la controversia, en su totalidad, debe ser conocida por otro juzgador por una cuestión de competencia. Ello redundará en salvaguardar la vigencia de las acciones ejercidas. En efecto, sí un tribunal, en lugar de declararse incompetente, decretara la



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

improcedencia de la vía, tendría por efecto dejar a salvo los derechos del enjuiciante, para que los haga valer ante un Juez diferente. Ello podría causar serios perjuicios al actor, porque podría ocurrir que las acciones ya hubieren prescrito. En cambio, la declaratoria de incompetencia tiene como efecto que los autos sean remitidos al Juez competente, bajo el entendido de que las actuaciones relativas a la demanda y contestación tendrán validez, en términos de lo previsto por el artículo 1117 del Código de Comercio. Lo anterior demuestra que el estudio previo de competencia no sólo se justifica desde un punto de vista lógico, sino también incide en dar continuidad (principio pro actione) y respetar el derecho de acceso a la justicia (debido proceso).

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 74/2012. Margarita Carmona Reyes. 4 de mayo de 2012.

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro.

*Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, esta tesis se publicó nuevamente con la modificación en el precedente que el propio tribunal ordenó, para quedar como aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 2009, de rubro: **"IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. NO ES FACTIBLE***



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

DECRETARLA CUANDO EL LITIGIO INVOLUCRA EL EJERCICIO DE ACCIONES DE DISTINTA NATURALEZA, NO PUEDE DIVIDIRSE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA.”

**TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
SALA SUPERIOR PRIMERA SECCIÓN ACUERDO G/S1-
11/2017 SE FIJA LA JURISPRUDENCIA VII/-J-1 aS-24**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 18, fracción VI/, y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y toda vez que se han resuelto en el mismo sentido cinco juicios contencioso administrativos, se fija la jurisprudencia número VIII-J-1aS-24, de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el siguiente rubro y texto:

SALAS ESPECIALIZADAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA.-

Atendiendo al principio procesal de la "continencia de la causa", que tiene por objeto evitar que exista multiplicidad de juicios con resoluciones contradictorias, sí en el juicio contencioso administrativo federal se impugnan dos o más actos, de los cuales uno de ellos actualiza la competencia de alguna de las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, enunciadas en el artículo 23 del



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

Reglamento Interior del propio Tribunal; la competencia material, para conocer del juicio de que se trate y de la legalidad de los restantes actos impugnados, se surte a favor de la Sala Especializada respectiva, aun cuando los demás actos por sí solos no actualicen su competencia material.

*Conforme a dicha directriz, la Autoridad Investigadora, en el ejercicio de la potestad disciplinaria que le confiere la ley, se encuentra obligada a **concentrar en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)** la totalidad de las pretensiones derivadas de la conducta atribuida al servidor público, comprendiendo tanto las de índole sancionadora como las de carácter resarcitorio. De esta manera, se asegura que la autoridad resolutora emita un pronunciamiento pleno y exhaustivo respecto de todas las consecuencias jurídicas emanadas de un mismo hecho típico, garantizando la **unidad procesal** y evitando la dispersión de actuaciones o decisiones fragmentadas sobre un solo acto reprochable.*

*En esa tesitura, las diligencias y actuaciones de la Autoridad Investigadora no deben circunscribirse únicamente a la verificación de los hechos denunciados como constitutivos de faltas administrativas graves o no graves, sino que deben asimismo comprender **el análisis y acreditación de las posibles afectaciones al erario o al patrimonio público** que guarden nexo causal con la conducta investigada. Esta visión comprensiva permite dotar de mayor solidez a la imputación formulada, ponderar*



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

*con precisión la magnitud de la infracción y, en su caso, **impulsar las acciones resarcitorias** que resulten procedentes en derecho.*

En tal virtud, la función investigadora cumple de manera cabal su finalidad institucional al proporcionar a la autoridad resolutora los elementos fácticos y jurídicos necesarios para dictar una resolución integral, eficaz y congruente, que armonice las vertientes punitiva y resarcitoria del régimen de responsabilidades administrativas, con el propósito de salvaguardar simultáneamente la disciplina del servicio público y la tutela del patrimonio estatal.

Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en tesis de jurisprudencia, estableció:

Tradicionalmente se ha considerado en el sistema jurídico mexicano que los jueces para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento están sujetos a la observancia no sólo del derecho positivo-legal, sino también de los dogmas generales que conforman y dan coherencia a todo el ordenamiento jurídico, que se conocen como principios generales del derecho según la expresión recogida por el constituyente en el artículo 14 de la carta fundamental. La operancia de estos principios en toda su extensión, para algunos como fuente de la cual abrevan todas las prescripciones legales, para otros como su orientación a fin, no se ha entendido restringida a los asuntos de orden civil tal y como podría desprenderse de una interpretación estricta del artículo constitucional



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

invocado, sino que aun sin positivización para otros órdenes de negocios, es frecuentemente admitida en la medida en que se les estima como la formulación más general de los valores ínsitos en la concepción actual del derecho. Su función no se agota en la tarea de integración de los vacíos legales; alcanza sobre todo a la labor de interpretación de la ley y aplicación del derecho, de allí que los tribunales estén facultados y, en muchos casos, obligados a dictar sus determinaciones teniendo presente, además de la expresión de la ley siempre limitada por su propia generalidad y abstracción, los postulados de los principios generales del derecho, pues éstos son la manifestación auténtica, prístina, de las aspiraciones de la justicia de una comunidad. (Semanao Judicial de la Federación, México, SCJN, octava época, t. 111, segunda parte 2, enero-junio de 1989, p. 573.)

De igual forma orienta la siguiente tesis con número de registro 174488 el cual manifiesta lo siguiente:

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.

De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudir a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador-apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.

En ese sentido la redacción del artículo 50 párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas presenta una antinomia con el 75, ya que no le otorga la facultad a la autoridad resolutora para imponer sanción respecto a los daños y perjuicios, y como quedo establecido al aplicar el principio de continencia de la causa, la Autoridad Investigadora puede hacer valer la pretensión punitiva y resarcitoria en el informe de responsabilidad administrativa, para de esta manera otorgar los elementos necesarios a la autoridad resolutora para en su momento valore las pruebas e imponga una sanción resarcitoria por los daños y perjuicios causados a la hacienda pública o el patrimonio del estado.”

V. Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras

Del análisis efectuado a la acción legislativa que nos ocupa, como integrantes de estas Comisiones, tenemos a bien emitir nuestra opinión respecto a la propuesta de mérito, a través de las siguientes consideraciones:

La presente acción legislativa busca fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas en el Estado de Tamaulipas, aclarando y precisando que, en los casos de faltas administrativas no graves que generen daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, la autoridad resolutora tenga facultad expresa para imponer la sanción disciplinaria correspondiente,



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

además de la sanción resarcitoria, es decir, la obligación de reparar el daño causado.

El artículo 149 constitucional local establece con claridad el régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, delimitando la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa y de las autoridades investigadoras y substanciadoras en materia de responsabilidades, en este sentido, la iniciativa que se dictamina se inserta en el ámbito propio del sistema estatal anticorrupción, particularmente en lo relativo a la adecuada articulación entre la pretensión punitiva y la pretensión resarcitoria derivadas de una misma conducta administrativa irregular.

El análisis de la propuesta debe realizarse a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen el sistema de responsabilidades administrativas y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo primordial es prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, así como fiscalizar y controlar los recursos públicos, dentro de este esquema, el resarcimiento del daño a la Hacienda Pública constituye un elemento esencial, pues no basta con sancionar disciplinariamente al infractor, por el contrario resulta indispensable restituir al Estado el patrimonio indebidamente afectado.

De esta manera, la obligación de reparar el daño es una exigencia del derecho interno, además de ser también una responsabilidad internacional del Estado mexicano, que se proyecta a las entidades federativas en el ámbito de sus competencias.



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

Del estudio sistemático de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas se reconoce la coexistencia de dos dimensiones de la potestad sancionadora, la punitiva y la resarcitoria, la primera tiene por objeto reprochar y sancionar la conducta contraria a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y rendición de cuentas que rigen el servicio público, la segunda busca reparar el daño patrimonial ocasionado al Estado.

La doctrina especializada ha señalado que la acción resarcitoria constituye una obligación patrimonial autónoma, que no se agota con la imposición de la sanción disciplinaria, pues el interés superior del Estado radica en la recuperación de los recursos públicos indebidamente afectados, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación distinguió claramente entre la pretensión punitiva, dirigida al sujeto infractor, y la reipersecutoria, orientada a la integridad del patrimonio estatal.

Bajo esta perspectiva, la iniciativa pretende armonizar el marco normativo estatal para evitar que, por deficiencias técnicas o interpretativas, la autoridad resolutora carezca de facultades expresas para imponer sanciones de carácter resarcitorio en casos de faltas administrativas no graves cuando se acredite la existencia de daños y perjuicios a la Hacienda Pública.

Es importante señalar que la promovente indica que el artículo 50 de la citada Ley establece que también se considerará falta administrativa no grave los daños y perjuicios causados de manera culposa o negligente a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público, y prevé la obligación de reintegrar los recursos recibidos indebidamente, sin embargo, la redacción de su tercer párrafo genera una posible antinomia con el artículo 75 del mismo ordenamiento, al no precisar de manera categórica la facultad de la autoridad resolutora para imponer, además de



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

la sanción disciplinaria correspondiente, la sanción económica de carácter indemnizatorio.

Es por eso que tal situación puede generar incertidumbre jurídica y afectar la eficacia del sistema de responsabilidades administrativas, pues podría interpretarse que, en casos de faltas no graves, la autoridad sólo puede abstenerse de imponer sanción cuando el daño no exceda cierto monto y haya sido resarcido, sin reconocer expresamente su potestad para fijar el monto indemnizatorio cuando el daño subsista.

Es pertinente subrayar que desde una interpretación sistemática y funcional, atendiendo al principio pro persona y al principio de eficacia de las normas, debe privilegiarse una lectura que permita a la autoridad resolutora pronunciarse integralmente sobre todas las consecuencias jurídicas derivadas de la conducta acreditada, incluidas las de naturaleza resarcitoria, no obstante, para evitar interpretaciones contradictorias y dotar de mayor certeza al procedimiento, por lo que resulta jurídicamente adecuado precisar legislativamente dicha facultad.

Es por ello, que la iniciativa encuentra sustento adicional en el principio de continencia de la causa, reconocido por la jurisprudencia federal, conforme al cual deben resolverse en un solo procedimiento todas las cuestiones sustancialmente vinculadas con un mismo hecho generador, a fin de evitar resoluciones contradictorias y garantizar la economía procesal. Aplicado al ámbito de las responsabilidades administrativas, este principio implica que la Autoridad Investigadora debe concentrar en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa tanto la pretensión punitiva como la resarcitoria, cuando ambas deriven de la misma conducta, de esta manera, la autoridad resolutora debe



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

contar con competencia suficiente para pronunciarse sobre ambas dimensiones, asegurando una resolución integral, congruente y exhaustiva.

El derecho administrativo sancionador, como manifestación de la potestad punitiva del Estado, debe regirse por los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, debido proceso y seguridad jurídica, por lo que la Suprema Corte ha reconocido que, para la construcción de sus principios constitucionales, es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal, en tanto ambos comparten la naturaleza de reacción frente a conductas antijurídicas.

En este contexto, reconocer expresamente la facultad de imponer sanciones resarcitorias en faltas no graves no vulnera el principio de legalidad, por el contrario lo fortalece, en la medida en que delimita con claridad el alcance de la potestad resolutoria y evita interpretaciones restrictivas que pudieran dejar sin reparación un daño patrimonial acreditado.

Asimismo, la reparación del daño constituye una consecuencia jurídica proporcional y razonable cuando se demuestra un detrimento al erario, pues responde al principio general del derecho conforme al cual quien causa un daño está obligado a repararlo, principio que encuentra sustento en el artículo 14 constitucional y en la tradición jurídica mexicana.

Igualmente, cabe resaltar que la Hacienda Pública representa el conjunto de recursos destinados a satisfacer necesidades colectivas y a garantizar derechos fundamentales, su protección es un deber jurídico, además de ser una exigencia ética en un Estado democrático, por lo que permitir que daños patrimoniales ocasionados por faltas administrativas no graves queden sin una determinación expresa de resarcimiento debilitaría el sistema de control y podría generar



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

incentivos perversos contrarios a la cultura de integridad pública, por lo que es necesario fortalecer el marco normativo para asegurar que toda afectación acreditada al patrimonio estatal sea susceptible de reparación dentro del propio procedimiento administrativo de responsabilidades, sin necesidad de iniciar procedimientos adicionales que impliquen dilación o riesgo de prescripción.

En virtud de lo expuesto, puede señalarse que la presente reforma contribuye a dotar de coherencia, certeza y eficacia al régimen de responsabilidades administrativas del Estado de Tamaulipas, al clarificar la facultad de la autoridad resolutora para imponer sanciones de carácter resarcitorio en casos de faltas administrativas no graves cuando exista daño o perjuicio a la Hacienda Pública, con ello se fortalece la tutela del patrimonio estatal, se armonizan las vertientes punitiva y reipersecutoria del sistema disciplinario y se consolida el compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que la reforma se relaciona directamente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la medida en que fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del patrimonio público, elementos esenciales para el desarrollo sostenible y la consolidación de instituciones sólidas.

Particularmente, guarda vinculación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16), que promueve “Paz, justicia e instituciones sólidas”, cuyo propósito es reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas (meta 16.5), crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas (meta 16.6) y garantizar el acceso a la justicia para todos (meta 16.3), al establecer con claridad la facultad de imponer sanciones resarcitorias por daños a la Hacienda Pública, incluso en faltas no graves, la reforma contribuye a fortalecer el sistema



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

estatal anticorrupción y asegurar que los recursos públicos se administren con integridad.

Cabe destacar que, en el marco de la coordinación permanente que existe entre este órgano legislativo y las dependencias que conforman la administración pública estatal, se estimó necesario recabar el criterio técnico-jurídico de la Titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a fin de contar con elementos especializados que permitieran valorar con mayor amplitud la viabilidad del asunto sometido a estudio, la cual tiene como finalidad enriquecer el análisis y dotar de mayor sustento a la determinación correspondiente, por lo que derivado de ello, la citada Secretaría manifestó, de manera general su procedencia con modificaciones a la propuesta planteada.

Por último, es necesario señalar que se realizaron ajustes de técnica legislativa, que de ninguna manera contravienen el sentido de la propuesta, por el contrario la fortalece y le brinda armonización con el ordenamiento jurídico que se pretende reformar.

VI. Conclusión

Finalmente, se considera procedente el presente asunto conforme a lo expresado en el presente dictamen, por lo que nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente proyecto de:



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 50, PÁRRAFO SEGUNDO; 75, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES III Y IV; 76, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES II Y III; Y 208, FRACCIÓN XI; Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 75; Y UNA FRACCIÓN IV AL PÁRRAFO PRIMERO, Y LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 76, EN MATERIA DE LA SANCIÓN RESARCITORIA POR FALTA NO GRAVE, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 50, párrafo segundo; 75, párrafo primero, fracciones III y IV; 76, párrafo primero, fracciones II y III; y 208, fracción XI; y se adicionan una fracción V al artículo 75; y una fracción IV al párrafo primero, y los párrafos cuarto y quinto al artículo 76, en materia de la sanción resarcitoria por falta no grave, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen:

Artículo 50. También...

Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrarlos a la Hacienda Pública o al patrimonio del ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente de la Auditoría Superior del Estado o de la autoridad resolutora. En el mismo término, estarán obligados los servidores públicos, cuando con motivo de sus funciones, causen daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio del Estado y medie resolución firme al respecto.

En...



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

La...

Artículo 75. En...

I. y II. ...

III. Destitución de su empleo, cargo o comisión;

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, y

V. Sanción resarcitoria.

La...

Artículo 76. Para...

I. El...

II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y

IV. El monto del daño o perjuicio causado, derivado del incumplimiento de obligaciones.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

En...

Se...

En ningún caso la sanción resarcitoria que se imponga podrá ser menor al monto de los daños o perjuicios causados. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones contempladas en el artículo 75 de esta Ley.

Las sanciones resarcitorias que se impongan se aplicarán conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la presente ley.

Artículo 208. En...

I. a la X....

XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. En los casos de daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o al Patrimonio del Estado, cuando no se realice el reintegro correspondiente dentro del término previsto en el artículo 50 de la presente Ley, se notificará a la Secretaría de Finanzas para los efectos conducentes.

TRANSITORIO

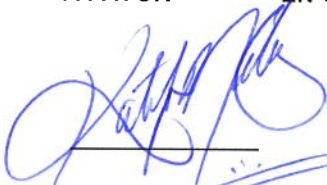



ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

Dado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintiséis.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. JUDITH KATALYNA MÉNDEZ CEPEDA PRESIDENTA			
DIP. MARCELO ABUNDIZ RAMÍREZ SECRETARIO			
DIP. GUILLERMINA MAGALY DEANDAR ROBINSON VOCAL			
DIP. ARMANDO JAVIER ZERTUCHE ZUANI VOCAL			
DIP. VÍCTOR MANUEL GARCÍA FUENTES VOCAL			
DIP. MARINA EDITH RAMÍREZ ANDRADE VOCAL			
DIP. JOSÉ ABDO SCHEKAIBAN ONGAY VOCAL			

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN RECAÍDO A LA INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA INCLUIR LA SANCIÓN RESARCITORIA POR FALTA NO GRAVE.



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

Dado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintiséis.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. ALBERTO MOCTEZUMA CASTILLO PRESIDENTE			
DIP. PATRICIA MIREYA SALDÍVAR CANO SECRETARIA			
DIP. ELIPHALETH GÓMEZ LOZANO VOCAL			
DIP. FRANCISCO ADRIÁN CRUZ MARTÍNEZ VOCAL			
DIP. SILVIA ISABEL CHÁVEZ GARAY VOCAL			
DIP. BYRON ALEJANDRO EDUARDO CAVAZOS TAPIA VOCAL			
DIP. MA DEL ROSARIO GONZÁLEZ FLORES VOCAL			

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN RECAÍDO A LA INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA INCLUIR LA SANCIÓN RESARCITORIA POR FALTA NO GRAVE.